

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, veintisiete (27) de enero dos mil veintitrés (2023)

Apelación auto
Exp.014-2022-00421-01

Vencido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala Quinta de Decisión Laboral resuelve el recurso de apelación interpuesto por PROTECCIÓN S.A por medio de su apoderada judicial, contra el auto que resolvió no librar mandamiento ejecutivo dentro del proceso ejecutivo que adelantó en contra de DECORMAQUILAS S.A.S.

ANTECEDENTES:

PROTECCIÓN S.A promovió demanda ejecutiva a fin de perseguir el pago de unas contribuciones parafiscales de la protección Social no saldadas con los correlativos intereses moratorios causados.

Por auto del 04 de noviembre de 2022 el Juzgado de Conocimiento que lo es el Catorce Laboral del Circuito de Medellín se abstuvo de librar mandamiento por encontrar insatisfechos los requisitos formales en tanto al no surtirse en debida forma el requerimiento al deudor de que trata el artículo 5° del Decreto 2633 de 1994 se consideró que la documentación allegada no presta mérito ejecutivo por no constituirse una obligación exigible.

La representante judicial de la activa se apartó de la decisión e interpuso recurso de reposición y en subsidio suyo el de apelación, aduciendo que conforme a lo que regula la Resolución N° 1702 de 2021 basta con la expedición del título ejecutivo; sin embargo, pone en conocimiento que la norma no exige que el documento deba entregarse, sino que debe probarse el envío de dicha comunicación sin determinar a la persona que recibe, constancia que ni siquiera corresponde a actuaciones que complementen el título, enfatizando por demás la responsabilidad que recae en los aportantes de reportar las novedades que se presenten de su registro como es el cambio de dirección, lo que debe darse dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero aclarar que la providencia cuestionada, es susceptible de la alzada conforme a lo previsto en el numeral 8° del artículo 65 del CPTSS, según el cual, es apelable el auto que decida sobre el mandamiento de pago.

Pues bien, atendiendo los argumentos de la alzada, se tiene que con miras a determinar la viabilidad de librar mandamiento de pago dentro de los trámites de ejecución en los que se persigue por mora el pago de las contribuciones a la seguridad social, se ha acudido a lo reglado en los artículos 100 y 101 CPT y de la SS., donde se ha dispuesto que es exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo que conste en un acto o documento proveniente del deudor o su causante o que emane de decisión judicial o arbitral en firme.

También se atiende el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 que reza: *“Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará merito ejecutivo”*. En igual sentido, el

artículo 2° del Decreto 2633 de 1994 que reglamentó la disposición en cita compilado en el decreto N° 1833 de 2016, establece que: *“vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993”*.

A más de lo anterior, conforme a lo estipulado en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, por medio de la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones, *“Las administradoras del Sistema de la Protección Social continuarán adelantando las acciones de cobro de la mora registrada de sus afiliados, para tal efecto las administradoras estarán obligadas a aplicar los estándares de procesos que fije la UGPP. La UGPP conserva la facultad de adelantar el cobro sobre aquellos casos que considere conveniente adelantarlos directamente y de forma preferente, sin que esto implique que las administradoras se eximan de las responsabilidades fijadas legalmente por la omisión en el cobro de los aportes”*.

En virtud de esa disposición, la UGPP procedió a fijar los estándares de cobro, inicialmente por medio de la Resolución N° 444 del 28 de junio de 2013, subrogada por la Resolución N° 2082 de 2016, última que bajo igual figura fue sustituida por la N° 1702 de 2021 con el fin de integrar en un solo acto todas las disposiciones que le conciernen, con los que se busca mejorar dentro de los procesos de cobro la gestión de cobro y optimizar el recaudo de la cartera en mora y de esta manera disminuir la evasión y cumplir con los fines del Sistema.

Para el aspecto que interesa a la Sala, los artículos 9, 10 y 11 dentro del capítulo del *“Estándar de acciones de cobro”* de la resolución, disponen:

“ARTÍCULO 9. OBJETIVO. El estándar de acciones de cobro tiene como finalidad propiciar el pago voluntario e inmediato de la obligación que el aportante adeuda al Sistema de la Protección Social, y el inicio de las acciones judiciales o de jurisdicción coactiva a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 10. CONSTITUCIÓN TÍTULO EJECUTIVO. La Unidad verificará que las administradoras privadas y públicas hayan expedido en un plazo máximo de nueve (9) meses contados a partir de la fecha límite de pago, la liquidación o acto administrativo que preste mérito ejecutivo, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas legales aplicables al respectivo subsistema.

Para iniciar las acciones de cobro coactivo o judicial será suficiente la constitución del título que presta mérito ejecutivo. Las acciones persuasivas y el aviso de incumplimiento no son actuaciones que complementen el título.

ARTÍCULO 11. ACCIONES PERSUASIVAS. Una vez las Administradoras constituyan el título que presta mérito ejecutivo, deben contactar al deudor como mínimo dos veces. El primer contacto lo deben realizar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la constitución o la firmeza del título ejecutivo, según se trate de entidad privada o pública, respectivamente, y el segundo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se realizó el primer contacto, sin superar cuarenta y cinco (45) días calendario, de conformidad con los criterios que se definen en el Anexo Técnico Capítulo 3.

ARTÍCULO 13. ACCIONES JURÍDICAS. Vencido el plazo anterior las administradoras contarán con un plazo máximo de cinco (5) meses para dar inicio a las acciones de cobro coactivo o judicial, según el caso”.

A partir de lo anterior y del íntegro contenido de ese acto administrativo, lo que fluye claro es que las Administradoras de la Protección Social públicas y privadas están obligadas al cumplimiento de los estándares de cobro allí definidas, por lo que la liquidación de lo adeudado que emerge a partir del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, debe realizarse en armonía con las prerrogativas establecidas en la Resolución N° 1702 de 2021, ya que sin la satisfacción del procedimiento allí plasmado no resultaría procedente el cobro de los aportes a los empleadores morosos por esta vía.

Así, lo que surge claro es que si bien el Decreto 2633 de 1994 dispone para efectos de activar la posibilidad de constituir su título ejecutivo en los términos del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 efectuar un requerimiento al deudor moroso, este en los literales términos de la Resolución ya mencionada no se constituye en una actuación que complementa el título, en tanto se faculta al Fondo para realizar el cobro judicial bastando con la liquidación que presta mérito ejecutivo dentro de los meses siguientes para cuando se dio la fecha límite de pago.

En ese orden, no es acertado pregonar que al no visualizarse la entrega efectiva del requerimiento que se envió a la sociedad que se ejecuta se disponga que la deuda no es exigible, dando paso a negar el impulso ejecutivo a partir de esa premisa, siendo suficientemente clara la norma para aducir que la acción judicial para perseguir el cobro de los aportes es viable con la presentación del título ejecutivo, que se constituye con la simple presentación de la liquidación de lo debido, a más que verificados los anexos de la demanda, se encuentra que el requerimiento que establece el Decreto 2633 de 1994 fue satisfecho, en tanto se dirigió a la dirección que el empleador tiene registrada ante Cámara de Comercio (Págs. 63-69 Archivo 03), cuya constancia de recibido se presentó desde la primera visita, lo que ocurrió desde el 22 de julio de 2022 (Pág. 35 Archivo 03), sin que sea dable al Juzgado exigir un requisito adicional para darla por entregada, y de presentarse una situación irregular al respecto, será la ejecutada quien en su oportunidad habrá de cuestionarlo.

Ahora, se tiene que las contribuciones sobre las que se busca su pago de parte de Decormaquilas S.A.S, corresponden a unos períodos de marzo de 2012, febrero, abril y septiembre a diciembre de 2017, enero y marzo de 2018, junio, noviembre y diciembre de 2019, marzo y septiembre a diciembre de 2020, enero y abril a diciembre de 2021 y enero a agosto de 2022 de diferentes trabajadores a su cargo (Pág. 14-34 Archivo 03), para lo que debe señalarse que la ya mentada Resolución N°1702 de 2021 revela la exigencia estricta de los tiempos y términos establecidos para proceder con la expedición del título ejecutivo, que no puede superar los nueve (9) meses contados desde la data en que debió ser cubierta la obligación, por lo que estando ante un deber legal incumplido en 2012 y 2017, a principios de 2022, con la elaboración de la liquidación del adeudo el 05 de octubre de 2022, no le era dable a la administradora ejecutante incluir en el título ejecutivo los ciclos que excedieron ese lapso, pues allí si se desnaturaliza la exigibilidad de la deuda y por tanto su cobro por la vía ejecutiva se hace inviable.

De ese modo, basta entonces acudir a las regulaciones administrativas que la UGPP tiene dispuestas, a las que remite el Estatuto Tributario, para corroborar que la obligación de los aportes cuya fecha límite de pago excedió los nueve (9) meses para cuando fue expedido el título ejecutivo - 05 de octubre de 2022 (Pág. 13 Archivo 03) no son actualmente exigibles y en ese orden, no se cumplen las

expectativas del artículo 442 del CGP que impone que son las obligaciones expresas, claras y exigibles las que pueden demandarse ejecutivamente.

Es así como, el mandamiento de pago procede, pero no por la totalidad de la deuda, sino por los aportes cuya fecha límite de pago no excedió el 05 de enero de 2022, sobre los demás, no era posible darse constitución del título ejecutivo bajo las condiciones del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 en el marco de los términos del acto administrativo por el que se establecieron los estándares de cobro de las Administradoras del Sistema.

Bajo tal reflexión, es que resulta pertinente y apegado a la legalidad REVOCAR la decisión apelada en tanto se abstuvo de librar mandamiento de pago, para en su lugar LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO en contra de DECORMAQUILAS S.A.S, y en favor de PROTECCIÓN S.A, por las siguientes sumas:

- \$34.920.014 por concepto del capital de la obligación a cargo del empleador por los aportes en pensión obligatoria, una vez excluidos los períodos cuya fecha de pago exceden el 05 de enero de 2022 porque no se adecúan a los términos de los parámetros dispuestos por la UGPP, conforme al cuadro que se anexa a esta decisión.
- \$2.038.900 por los intereses liquidados el 12 de septiembre de 2022, además de los que se sigan causando con posterioridad.
- Las costas y agencias en derecho del proceso ejecutivo.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **REVOCA** el auto apelado de fecha y procedencia conocidas y en su lugar LIBRA MANDAMIENTO EJECUTIVO en contra de DECORMAQUILAS S.A.S, y en favor de PROTECCIÓN S.A, por las siguientes sumas:

- \$34.920.014 por concepto del capital de la obligación a cargo del empleador por los aportes en pensión obligatoria.

- \$2.038.900 por los intereses liquidados el 12 de septiembre de 2022, además de los que se sigan causando con posterioridad.

- Las costas y agencias en derecho del proceso ejecutivo.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS**.

Los Magistrados



CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 13 fijados el 30 de enero de 2023
en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El Secretario.

ANEXO

PERIODO	CAPITAL	INTERESES	202109	\$	145.364,0	\$	28.300,0
201203	\$	90.720,0	202110	\$	145.364,0	\$	28.300,0
202003	\$	4.682,0	202111	\$	145.364,0	\$	19.200,0
202003	\$	140.448,0	202008	\$	9.363,0	\$	4.700,0
202003	\$	140.448,0	201602	\$	11.031,0	\$	20.000,0
202004	\$	140.448,0	201804	\$	124.999,0	\$	142.100,0
202005	\$	140.448,0	201203	\$	90.720,0	\$	270.000,0
202006	\$	140.448,0	201803	\$	124.999,0	\$	145.100,0
202007	\$	140.448,0	201704	\$	7.872,0	\$	11.400,0
202008	\$	140.448,0	202009	\$	28.090,0	\$	12.200,0
202101	\$	4.545,0	202109	\$	145.364,0	\$	28.300,0
202105	\$	145.364,0	202110	\$	145.364,0	\$	28.300,0
202106	\$	145.364,0	202111	\$	145.364,0	\$	19.200,0
202107	\$	145.364,0	201912	\$	97.269,0	\$	66.100,0
202108	\$	145.364,0	202111	\$	121.137,0	\$	16.000,0
202109	\$	290.728,0	201906	\$	101.583,0	\$	83.000,0
202110	\$	290.728,0	201911	\$	17.667,0	\$	12.500,0
202111	\$	290.728,0	201912	\$	132.499,0	\$	90.100,0
202109	\$	4.845,0	202008	\$	140.448,0	\$	27.400,0
202110	\$	145.364,0	202009	\$	140.448,0	\$	27.400,0
202111	\$	145.364,0	202010	\$	140.448,0	\$	27.400,0
202010	\$	18.726,0	202011	\$	140.448,0	\$	27.400,0
202107	\$	145.364,0	202012	\$	140.448,0	\$	27.400,0
202108	\$	145.364,0	202101	\$	125.982,0	\$	24.600,0
202109	\$	145.364,0	202104	\$	176.000,0	\$	55.300,0
202110	\$	145.364,0	202002	\$	4.682,0	\$	3.000,0
202111	\$	4.845,0	201702	\$	7.869,0	\$	11.800,0
201605	\$	91.928,0	201709	\$	118.035,0	\$	154.200,0
202111	\$	53.300,0	201710	\$	118.035,0	\$	151.200,0
202012	\$	4.682,0	201711	\$	118.035,0	\$	148.200,0
202103	\$	135.673,0	201712	\$	118.035,0	\$	145.400,0
202101	\$	4.845,0	201801	\$	124.999,0	\$	151.000,0
202102	\$	145.364,0	202002	\$	4.682,0	\$	3.000,0
201507	\$	103.096,0	202004	\$	140.448,0	\$	78.600,0
201511	\$	30.929,0	202005	\$	140.448,0	\$	69.600,0
202011	\$	4.682,0	202006	\$	140.448,0	\$	69.600,0
202111	\$	4.845,0	202001	\$	140.448,0	\$	92.500,0
201904	\$	132.499,0	202002	\$	140.448,0	\$	89.700,0
201905	\$	132.499,0	202003	\$	140.448,0	\$	78.600,0
202109	\$	4.845,0	202004	\$	140.448,0	\$	78.600,0
202009	\$	42.134,0	202005	\$	140.448,0	\$	69.600,0
202104	\$	145.364,0	202006	\$	140.448,0	\$	69.600,0
202105	\$	145.364,0	202007	\$	140.448,0	\$	69.600,0
202106	\$	145.364,0	202008	\$	140.448,0	\$	69.600,0

202009	\$	140.448,0	\$	60.900,0	202012	\$	140.448,0	\$	52.500,0
202010	\$	140.448,0	\$	60.900,0		\$	10.229.463,0	\$	5.200.300,0
202011	\$	140.448,0	\$	52.500,0					